

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que crea el Servicio de Auditoría
Interna de Gobierno.

[BOLETÍN N° 16.316-05](#)

[Objetivo\(s\)](#) / [Constancias](#) / [Normas de Quórum Especial](#) (sí tiene) / [Consulta Excma. Corte Suprema](#) (no hubo) / [Asistencia](#) / [Antecedentes de Hecho](#) / [Aspectos Centrales del Debate](#) / [Discusión en General](#) / [Votación en General](#) / [Informe Financiero](#) / [Texto](#) / [Acordado](#) / [Resumen Ejecutivo](#).

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font, con urgencia calificada de “suma”.

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la mayoría de sus integrantes (4x1 abstención).

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Crear el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado.

Definir una nueva regulación para la auditoría interna gubernamental, fortalecer su carácter técnico e independiente, así como su institucionalidad y contar con una Política de Auditoría General de Gobierno.

Crear un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, órgano colegiado que asesorará al Auditor General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

Otorgar reconocimiento legal a la Red de Auditoría Interna, conformada por auditores institucionales y los equipos de profesionales de

auditoría interna y robustecer las unidades de auditoría interna de la Administración del Estado.

CONSTANCIAS

- [Normas de quórum especial](#): Sí tiene.
- [Consulta a la Excma. Corte Suprema](#): No hubo.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Los artículos 18 y 28 del proyecto de ley tienen el carácter de ley orgánica constitucional por establecer el deber de estricto cumplimiento al principio de probidad, en mérito de lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero, en relación al artículo 66 inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

Los artículos 19 y 32 del proyecto de ley tienen el carácter de ley de quórum calificado por establecer la reserva de información, en mérito de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, en relación al artículo 66 inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

ASISTENCIA

- Representantes del Ejecutivo e invitados:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Subsecretaria, señora Macarena Lobos y los asesores, señoras Loreto González, Marcía González e Isidora Venegas, y señor Gabriel Aránguiz.

De la Contraloría General de la República, la Contralora General (S), señora Dorothy Pérez.

Ex Presidente del Consejo Auditoría Interna General de Gobierno, señor Rodrigo Moraga

Del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, la Consejera, señora Isabel Torres y el Consejero, señor Francisco Javier Lois.

- Otros:

La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante.

Los asesores del Honorable Senador García, señora Valeria Gutiérrez y señor José Miguel Rey.

La asesora el Honorable Senador Insulza, señora Lorena Escalona.

El asesor del Honorable Senador Kast, señor Oscar Morales.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

El asesor del Honorable Senador Núñez, señor Elías Mella.

De la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista, señor Samuel Argüello.

De la Fundación Jaime Guzmán, la Directora del Área Legislativa, señora Bárbara Bayolo.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración el [Mensaje](#) de Su Excelencia el señor Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font.

- - -

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

El proyecto de ley consta 34 artículos permanentes y 7 disposiciones transitorias.

En las sesiones en la que se discutió en general esta iniciativa, distintos señores Senadores se mostraron interesados en que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno sea una instancia no solo de control, sino que tenga también una orientación hacia la Modernización del Estado y la mejora

continúa dentro del aparato estatal. Asimismo, expresaron sus inquietudes respecto de la dotación que tendrá este organismo en relación a la Contraloría General de la República, como también la relevancia de que los integrantes del Consejo Consultivo de Auditoría Interna no tengan función exclusiva, atendido el monto de dieta que percibirán de acuerdo a lo propuesto en la iniciativa legal.

En particular, el Honorable Senador señor Insulza expresó sus reparos respecto de la distinción que se plantea entre auditoría interna y externa como, asimismo, acerca de la posible colisión de funciones que puede tener lugar entre ambos organismos, manifestando, además, no estar de acuerdo con la autonomía que se contempla para el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

La señora Subsecretaria, por su parte aclaró que el proyecto de ley recoge recomendaciones de organismos internacionales y da cumplimiento al compromiso adquirido por parte del Ejecutivo con la Cámara de Diputados, en orden a institucionalizar el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG) mediante la creación de un servicio público y de un consejo asesor. Asimismo, recalcó que el control interno que se propone es complementario y coadyuvante del control externo que realiza la Contraloría General de la República.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL¹

A.- Presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo.

En sesión de **20 de marzo de 2024**, la **Subsecretaria General de la Presidencia**, señora **Macarena Lobos**, efectuó una [presentación](#), en formato ppt, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

OBJETIVO

¹ A continuación, figura el link de cada una de las sesiones, transmitidas por TV Senado, que la Comisión dedicó al estudio del proyecto:

20 de marzo de 2024:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2024-03-19/133755.html>

30 de julio de 2024:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-hacienda/2024-07-29/143153.html>

- La creación de un órgano de la Administración del Estado que realice labores de auditoría interna de gobierno, las cuales consisten en un apoyo al Gobierno en sus responsabilidades de supervisión, previsión y prevención de irregularidades.

- Lo anterior, permite al Gobierno contar con una buena gobernanza del sector público, proporcionando evaluaciones imparciales y objetivas respecto del empleo de recursos públicos, propiciando así una adecuada rendición de cuentas e integridad en sus actos, mejorando las operaciones, y generando confianza entre los ciudadanos y las partes interesadas.

SITUACIÓN ACTUAL

- Las funciones de auditoría interna de gobierno se encuentran radicadas en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (en adelante "CAIGG").

- El CAIGG es un consejo asesor presidencial que fue creado a través del decreto supremo N° 12 de 1997, dictado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- Este órgano asesor no cuenta con atribuciones ejecutivas. Sus principales funciones consisten en proponer al (a la) Presidente(a) de la República los objetivos gubernamentales y promover lineamientos técnicos de auditoría interna a los auditores internos.

- La regulación del CAIGG fue actualizada recientemente mediante el decreto supremo N° 17 de 2023, dictado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

- La OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han recomendado a nuestro país, en distintos informes, que la auditoría interna gubernamental debiera contar con una institucionalidad propia, consagrada en una norma de rango legal.

- Además, la OCDE ha formulado recientemente diversas recomendaciones, dentro de las cuales destaca:

- La auditoría interna gubernamental debe poder coordinar a las distintas unidades de auditoría de los diversos órganos de la Administración del Estado para que sigan los lineamientos técnicos definidos.

- Las unidades de auditoría interna deberían estar integradas por, al menos, dos profesionales con competencias técnicas suficientes para

ejercer como auditores.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

CONSAGRACIÓN LEGAL Y NUEVA REGULACIÓN

- El proyecto de ley crea al SAIG como un servicio público, descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que se relacionará con el (la) Presidente(a) de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

- El SAIG tendrá por objetivo colaborar para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE PROYECTO

- Las disposiciones de este proyecto se aplican a los órganos de la Administración del Estado consagrados en el inciso segundo del artículo 1 de la LOCBGAE (ley N° 18.575).

- Sin embargo, las disposiciones del proyecto no se aplican a la Contraloría General de la República, al Banco Central, al Consejo para la Transparencia, a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de Educación Superior de carácter estatal.

- En el caso de los gobiernos regionales, se encuentra en trámite el proyecto de ley de financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional (Boletín N° 15.921-05), en el cual se establecen mecanismos de control y rendición de cuentas, así como herramientas adicionales de control del uso de los recursos públicos y responsabilidad fiscal, por lo que corresponde que sea en dicha instancia donde se establecen las herramientas de control necesarias respecto a dichos órganos.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

- Algunas de estas funciones las ha ejercido hasta ahora el CAIGG.

- Otras, en cambio, son nuevas y buscan actualizar y reforzar las labores de auditoría interna gubernamental. Dentro de estas nuevas funciones y atribuciones, es posible destacar las siguientes:

- Excepcionalmente, realizar auditorías a requerimiento del (de la) Presidente(a) de la República.

- Proponer al (a la) Presidente(a) de la República la Política de Auditoría Interna de Gobierno.

- Velar por la correcta implementación de las recomendaciones sugeridas en procesos de auditoría interna.

- Requerir la colaboración de los distintos órganos de la Administración del Estado y pedir toda la información necesaria para examinar situaciones de su competencia.

- Conforme a los comentarios formulados por la Contralora(S), se establece expresamente que el SAIG ejercerá sus atribuciones, sin perjuicio de la dependencia técnica que la Contraloría ejerce respecto de los(as) auditores(as) institucionales, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LOCCGR.

LA POLÍTICA DE AUDITORÍA GENERAL DE GOBIERNO Y PLANES DE AUDITORÍA

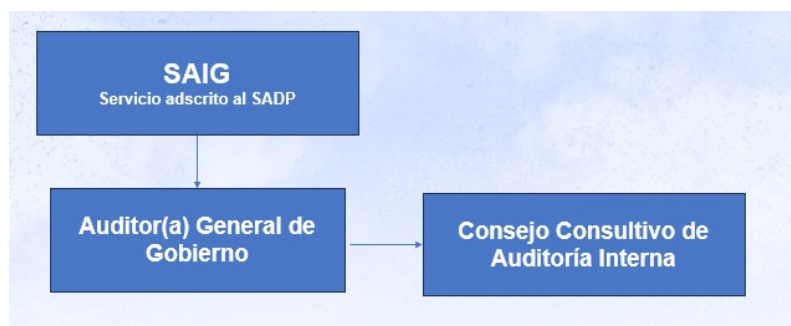
- Se trata de un instrumento que contiene los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos de la Administración del Estado.

- Es propuesto por el SAIG y aprobado por el (la) Presidente(a) de la República. El SAIG debe escuchar la opinión del Consejo Consultivo antes de proponer la Política.

- Tiene por finalidad garantizar una regulación que trascienda a los gobiernos de turno y que sea aplicada por los diversos órganos de la Administración del Estado, por lo que regirá por un plazo de cinco años, pudiendo ser actualizada en la mitad de su periodo de vigencia.

- Los órganos de la Administración del Estado deben elaborar un Plan de Auditoría Interna, el cual fijará el trabajo a desarrollar por un año calendario y debe contener los lineamientos establecidos en la Política. Dicho Plan debe ser aprobado por el jefe de servicio respectivo, previo informe técnico vinculante del SAIG.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL SAIG



AUDITOR(A) GENERAL DE GOBIERNO

- El(la) Auditor(a) General de Gobierno es el jefe(a) de servicio, deberá contar con un mínimo de 10 años de experiencia laboral en materias de auditoría interna y tener un título profesional de al menos ocho semestres de duración, para asegurar su carácter técnico.

- Funciones:

- La planificación, organización, dirección, coordinación y control del funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

- Rendir cuenta anualmente de su gestión al (a la) Presidente(a) de la República a través de una memoria o balance institucional.

- La emisión de informes trimestrales al (a la) Presidente(a) de la República, dando cuenta de los principales hallazgos realizados en los órganos de la Administración del Estado, con el objetivo de informar respecto al funcionamiento de dichos órganos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Auditoría General de Gobierno y de los planes de auditoría interna.

CONSEJO CONSULTIVO DE AUDITORÍA INTERNA

- La función del Consejo es asesorar al (a la) Auditor(a) General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

- Se compone de tres personas de vasta experiencia profesional y/ o académica.

- Los(as) consejeros(as) son designados(as) por el(la) Presidente(a) de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

- El proyecto de ley hace aplicable a los consejeros las normas de

probidad y, particularmente, el deber de abstención.

- Atribuciones:

- Opinar sobre el contenido de la Política de Auditoría General de Gobierno propuesta por el SAIG.

- Asesorar oportunamente sobre las propuestas legales y reglamentarias.

- Asesorar sobre la propuesta de normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna.

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA

- Se reconoce la Red de Auditoría Interna, la cual estará conformada por los auditores institucionales y los equipos de auditoría interna de los distintos órganos, quienes deberán desarrollar sus funciones en base a la coordinación y dirección que realice el SAIG, buscando homogeneizar el quehacer de la auditoría interna gubernamental de forma transversal en la Administración del Estado.

- Siguiendo la recomendación de la OCDE, el proyecto de ley indica que las unidades de auditoría de los órganos de la Administración del Estado deben tener, al menos, dos profesionales que cumplan con los perfiles técnicos y modelos de competencia definidos por el SAIG.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

- El proyecto de ley establece un plazo de un año para que el(la) Presidente(a) de la República fije la planta de personal y las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento, así como la fecha de entrada en funcionamiento del SAIG, mediante un decreto con fuerza de ley.

- Asimismo, establece otras normas transitorias, con el objeto de asegurar una entrada en vigencia gradual y ordenada, permitiendo a los distintos órganos de la Administración del Estado adaptarse a esta nueva regulación.

IMPACTO PRESUPUESTARIO

- Para la conformación del Servicio se considera el traspaso del personal existente del CAIGG, cuyo financiamiento está en la partida presupuestaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y, además, la incorporación de 9 personas para el refuerzo de las funciones de

administración y finanzas.

- También se consideran las dietas de los consejeros.

- Así, el mayor costo del proyecto de ley es el que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1: Costo por año proyecto de ley (M\$ 2023)

Ítem	Año 1	Régimen
Subtítulo 21	306.729	306.729
Subtítulo 22	17.358	17.358
Subtítulo 29	14.940	0
Total	339.027	324.087

- Así, la presente iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual estimado de \$339.027 miles el primer año y \$324.087 en régimen.

- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

B.- Debate suscitado en la Comisión con ocasión de ellas.

La **señora Subsecretaria** informó que la iniciativa legal que se discute se encuentra en segundo trámite constitucional. Agregó que fue considerada en la Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda, donde se efectuaron algunos ajustes al proyecto, recomendados por la señora Contralora General de la República (s), en materia de garantizar la complementariedad de ambos tipos de control. Destacó que la iniciativa fue aprobada unánimemente en dicha Comisión.

El **Honorable Senador señor Sanhueza** observó que la idea es que el Servicio que se crea mediante esta iniciativa no solamente reemplaza al Consejo de Auditoría General de Gobierno, sino que se le dota de estructura, lo que le permitiría funcionar auditando a los diferentes órganos del Estado, con excepción de aquellos que se mencionan.

Reparó en que, de acuerdo con lo señalado por la señora Subsecretaria, la dotación del Servicio sería de 40 funcionarios provenientes del Consejo de Auditoría, a los que se sumarían 9 personas de refuerzo. Al

respecto expresó que al dimensionar lo que significa cada órgano del Estado, sus ministerios, sus diferentes servicios, etc., y comparar con el número de funcionarios con que cuenta la Contraloría General de la República, parecieran bastante insuficientes las 9 personas de refuerzo.

Estimó que, si bien se avanza en la línea correcta, la musculatura que se está dando resulta insuficiente para un Servicio que tendrá los objetivos que se proponen, toda vez que esta iniciativa deriva de situaciones como el “caso convenios”, en que el Consejo no funcionó por diferentes motivos, pero mostró una realidad.

Puso de relieve que la auditoría no siempre debe mirarse desde el punto de vista punitivo, sino que cómo se mejora el funcionamiento de los diferentes organismos, por lo tanto, no se trata solamente de la pesquisa de algún delito o trasgresión de una norma, de modo que consideró que pensar en 50 funcionarios es muy poco para lo que debiera significar un servicio de esta envergadura.

Debido a lo anterior, concordó con la señora Subsecretaria en cuanto a la forma en que funciona el Estado en general, y de qué manera se puede evitar que ocurran hechos que, finalmente, ponen en tela de juicio a todo el sistema y a todos quienes participan en el mundo político.

El **Honorable Senador señor Kast** apuntó a que el problema hoy en día no es solamente de controles, ámbito en el cual la Contraloría General de la República realiza una labor bastante intensa, sino que también de modernización del Estado.

Estimó que sería positivo que esta nueva instancia se orientara mucho a modernizar el Estado y no solamente vigilando que se cumpla con los procedimientos, sino que sea una oportunidad de mejora continua de licitaciones, de formas de hacer las cosas más eficientes dentro del aparato público.

Manifestó que si ese es el enfoque que se busca dar al Servicio, entonces la iniciativa que se discute sería muy positiva e incluso, tal como señaló el Senador Sanhueza, podría ser positivo empoderar aún más al Servicio.

Hizo presente que en reformas del Estado se ha dicho muchas veces que esto es necesario y finalmente se gastan muchos recursos y horas/hombre en evitar que ocurran irregularidades, pero se gastan muy pocos recursos, proporcionalmente, en modernizar el aparato público de manera de hacerlo más rápido, más eficiente, más estable y menos oscilante con los ciclos políticos.

Respecto de los nombramientos refirió que, en el servicio público, cambian los gobiernos y, normalmente, tienen lugar los “cuoteos políticos”, en que entran funcionarios con poca carrera técnica, sin perjuicio de encontrar excepciones en ciertos lugares del Estado que son mucho más técnicos, más estables y con miradas a largo plazo, cuyo caso más emblemático es probablemente el Banco Central.

Preguntó si en el nombramiento del Auditor(a) General de Gobierno puede blindarse un poco más en términos de que sea un cargo más robusto y técnico, de lo contrario nuevamente habrá un servicio público presionado por los distintos partidos políticos de la coalición que gobierne para poner a uno de los suyos mientras dure el cargo.

La **señora Subsecretaria** explicó que efectivamente el proyecto de ley que se discute se inserta dentro de la mejora continua y la modernización del Estado. Asimismo, señaló que dentro del compromiso de pacto fiscal hay una dimensión de modernización del Estado muy importante y se está avanzando en cuestiones como esta, en transformación digital, materia en la cual se aprobó recientemente la Secretaría de Gobierno Digital que se radicó en la Subsecretaría de Hacienda justamente para ir de la mano con el Consejo de Modernización y de esa manera poder acercarse al Estado y satisfacer de manera más eficiente y oportuna las necesidades de la ciudadanía.

Añadió que el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno no hará auditorías directamente, sino que se enmarca en la lógica de apoyar los procesos de mejora continua y, por lo tanto, va a fijar los lineamientos para los auditores internos.

Destacó que el proyecto de ley reconoce la Red de Auditores Ministeriales considerando que el control tiene círculos concéntricos que se complementan. En ese sentido señaló que el primer círculo es la jefatura y los auditores internos y asimismo se está reforzando aquello que plantea la OCDE, que es que haya al menos dos auditores y con cierto perfil.

Puntualizó que hoy en día muchos servicios tienen muy buenos auditores y auditoras ministeriales, pero ocurre que muchos servicios no tienen la cantidad de personal adecuado para eso y muchas veces tampoco cumplen el perfil. Relevó que mediante el proyecto de ley en discusión se establece un perfil acerca de los requisitos que deben cumplir estas personas y lo mismo respecto del Auditor o Auditora General.

Agregó que si se observa el artículo 7 del proyecto de ley referido a las funciones o atribuciones se advierte que se busca que sea una herramienta de acompañamiento para los servicios de modo que puedan cumplir de mejor manera sus funciones.

Estimó que la dotación inicial que se plantea para este Servicio es la adecuada porque en la práctica tendrá la tuición técnica y de asesoría para los auditores ministeriales con el objeto de fortalecer el músculo en la base, esto es, en los propios servicios.

Destacó que se requiere crear capacidades al interior de los propios servicios y es por ello que el órgano que se crea mediante el proyecto de ley que se discute entregará los lineamientos técnicos y muy excepcionalmente realizará auditorías directas en casos concretos cuando así corresponda.

Acerca de la consulta formulada por el Senador Kast, referida a los nombramientos, contestó que la iniciativa en discusión establece perfiles técnicos y será una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública que es el sistema con que se cuenta para el nombramiento en los servicios públicos y estimó no sería adecuado innovar al respecto, sin perjuicio de poder revisar el sistema y plantear mejoras en lo que sea necesario hacia el futuro.

El **Honorable Senador señor Insulza** consideró interesante la iniciativa en discusión y coincidió en que debería realizar una especie de asesoría, no obstante, manifestó su preocupación por la constante creación de organismos y por la falta de reorganización del Estado de una manera más coherente. Dio cuenta de que el problema existió y se dijo cuando se presentó el problema de las asignaciones en que si hubiera habido una auditoría interna ello no habría ocurrido.

Manifestó su intención de votar a favor del proyecto de ley, y agregó que en algún momento habrá que pensar en la reforma del Estado y no seguir haciendo crecer el aparato del Estado.

El **Honorable Senador señor Lagos** observó que en este caso se reemplaza el actual Consejo por este Servicio de modo que se trasladan los 40 funcionarios, con nuevas atribuciones y se agregan 9 personas más de refuerzo.

La **señora Subsecretaria** compartió con el Senador Insulza que la modernización del Estado resulta clave, es un tema que, siendo tan esencial, muchas veces queda postergado y es una preocupación compartida y consideró que, dentro del debate de pacto fiscal, sería importante avanzar en esa materia que es uno de los núcleos estructurantes.

Hizo hincapié en que el proyecto de ley que se discute no busca crear una institución nueva, sino que legalizar y llevar a rango legal algo que ya existe como programa presupuestario y efectivamente el delta que tiene son 9 funcionarios respecto de los funcionarios y trabajadores a honorarios que tiene hoy día.

Asimismo, señaló que se estimó pertinente mantener la estructura de un Consejo, compuesto por tres personas, que preste asesoría al Auditor o Auditora General, estableciéndose una dieta para los consejeros a fin de garantizar la dedicación que labores como esta requieren.

El **Honorable Senador señor Sanhueza** preguntó si los consejeros tendrán dedicación exclusiva.

La **señora Subsecretaria** respondió negativamente.

El **Honorable Senador señor García** preguntó si los consejeros podrían ser funcionarios públicos, toda vez que el artículo 14 del proyecto de ley establece que “Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero o la consejera.”, por lo que si fueran ingresos privados no habría como prohibirlo a menos que hubiera algunas funciones incompatibles.

Debido a ello observó que la dieta representa un monto menor, teniendo en cuenta además que se establece un máximo de 6 sesiones al año lo que representaría una cifra aproximada de \$480.000, no obstante, es importante que exista.

La **señora Subsecretaria** Explicó que el Consejo no es permanente, sino que las labores de jefatura del Servicio son del Auditor General, por tanto, es un Consejo consultivo para materias específicas que se establecen en el proyecto de ley.

Hizo presente que el artículo 15 de esta iniciativa legal dispone que “La calidad de Consejero o Consejera será incompatible con el ejercicio de los cargos de diputado o diputada, senador o senadora, delegado o delegada presidencial regional o provincial, alcalde o alcaldesa, concejal, gobernador o gobernadora regional, consejero o consejera regional, miembro del escalafón primario del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario o funcionaria de la Administración del Estado, funcionario o funcionaria del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos.”.

Puntualizó que lo anterior da cuenta de una incompatibilidad para el ejercicio de funciones en la Administración del Estado y se establece de una manera distinta que los consejeros no tienen dedicación exclusiva y, por lo tanto, pueden percibir otros ingresos considerando que el número de sesiones del Consejo será acotado y su labor principal será la de asesorar al Auditor General en la formulación de la política de auditoría y de esa manera habrá plena compatibilidad para que los consejeros puedan desempeñar otras labores fuera del Estado.

El **Honorable Senador señor García** observó que la dieta comprendería 2 unidades de fomento por cada sesión con un máximo de 6, de

modo que los consejeros percibirían un monto máximo de alrededor de \$480.000 al año.

El **Honorable Senador señor Insulza** opinó que sería interesante escuchar la opinión de la señora Contralora General de la República (s) sobre el proyecto de ley que se discute.

La **señora Subsecretaria** señaló que, en la Cámara de Diputados, efectivamente fue invitada la señora Contralora General de la República (s) quien formuló una serie de observaciones que tenían por objeto dejar claramente establecida la complementariedad de los controles y, por tanto, se efectuó una serie de adecuaciones con el fin de garantizar ese objetivo.

El **Honorable Senador señor Lagos** observó que lo anterior se realizó con el objeto de que no hubiera dudas respecto de las atribuciones actuales de la Contraloría General de la República en cuanto a su rol.

El **Honorable Senador señor García** sugirió invitar también a don Rodrigo Moraga quien fue el primer Auditor General de Gobierno.

La **señora Subsecretaria** sugirió a la Comisión invitar también a los miembros del actual Consejo para conocer su opinión.

En sesión de **30 de julio de 2024**, la **señora Subsecretaria General de la Presidencia, señora Macarena Lobos**, recordó que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) existe como programa presupuestario dentro del presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia.

Añadió que, con la finalidad de dar cumplimiento tanto a las recomendaciones de la OCDE como también al compromiso adquirido en el marco de la Comisión Investigadora del “Caso Convenios” de la Cámara de Diputados es que se busca crear un servicio público descentralizado, con carácter técnico y patrimonio propio, el cual se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración, a través de labores de aseguramiento en todo aquello vinculado al buen uso de los recursos públicos, la transparencia y la probidad.

Hizo presente que esta materia se encuentra regulada a nivel de reglamento a través de un Decreto Supremo del Presidente de la República del año 1997, durante el gobierno del ex Presidente señor Eduardo Frei y que, habiendo transcurrido largos años, se ha estimado necesario institucionalizar el CAIGG mediante la creación de un servicio público y de un consejo asesor.

Precisó que el servicio público mencionado estará dirigido por el Auditor o Auditora General, que será seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP), y por el Consejo Consultivo de Auditoría Interna que planteará la estrategia o política de auditoría.

Agregó que, un punto de largo debate durante el primer trámite constitucional de esta iniciativa legal estuvo referido a la forma de compatibilizar el trabajo de control interno que se concibe como la herramienta más eficaz y eficiente para poder detectar irregularidades, con el control externo que realiza la Contraloría General de la República, respecto de la cual el Servicio que se propone es un coadyuvante.

Puntualizó que para garantizar la debida coordinación entre ambos controles se acogieron las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República durante el primer trámite legislativo de este proyecto de ley, por lo tanto, se explicitó en el texto la necesidad de coordinación entre ambos órganos, reconociendo la tuición técnica de la Contraloría sobre los auditores en virtud del artículo 18 de su ley orgánica constitucional.

Puso de relieve que, desde el punto de vista presupuestario, materia de competencia de la Comisión de Hacienda, lo que se hace es traspasar los recursos que existen hoy en día en el programa presupuestario a lo que se agrega un incremento de 9 funcionarios más el costo asociado a la dieta de los consejeros y consejeras que se considera, por lo tanto, ello implicaría un gasto en régimen del orden de \$324 millones.

A continuación, la Comisión escuchó a la **señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República (S)**, quien efectuó una [presentación](#), en formato ppt., del siguiente tenor:

Presentación de la CGR

SOBRE PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO

OBSERVACIONES RECOGIDAS EN EL PROYECTO

Se aprecia que diversas observaciones formuladas en su oportunidad por la CGR fueron acogidas, como ocurre, entre otras, con las siguientes:

- Artículo 2° inciso segundo, que se refería al SAIG como “órgano rector”, sin precisar en qué consiste.
- Artículo 3°, que preveía que la ley se aplica a órganos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, con excepción de los

que ahí enuncia, entre ellos, el Ministerio Público, que no forma parte de la Administración.

- Artículo 17, inciso segundo, que disponía que los consejeros cesarían automáticamente si les afectaba incapacidad psíquica o física.

- Artículo 22, de acuerdo con el cual el consejo sesionaría con 2 integrantes, pero luego establecía que los acuerdos se tomarían por mayoría.

- Artículo 33, estipulaba que, para el ejercicio de sus funciones, el SAIG podrá solicitar la colaboración de los distintos “órganos de la Administración del Estado”, sin excluir a ninguno (en especial, aquellas entidades que poseen autonomía constitucional y/o legal y que se individualizan en el inciso segundo artículo 1° de la ley N° 18.575).

Nota: el actual artículo 33 precisa: “*distintos órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo*”, sin indicar la norma a la que se refiere.

COMENTARIOS SOBRE EL PROYECTO

1.- El artículo 7°, en su letra h), señala como función del SAIG: “Asesorar técnicamente a los auditores internos institucionales y a equipos de auditoría interna, según corresponda, en la elaboración de los planes de auditoría interna de los órganos señalados en el artículo”.

No obstante, esta función o atribución podría colisionar con el artículo 18 de la ley N°10.336, conforme al cual: “*Los contralores, inspectores, auditores o empleados con otras denominaciones que tengan a su cargo estas labores quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría General, y en caso de que aquellos funcionarios representen actos de sus jefes, éstos no podrán insistir en su tramitación sin que haya previamente un pronunciamiento escrito de ese Organismo favorable al acto*”.

Si bien el artículo 8° menciona la coordinación entre el SAIG y la CGR, es recomendable **incorporar un inciso final nuevo que refuerce la facultad de la Contraloría, de dictar instrucciones para los efectos de dicha coordinación**. Por ejemplo, “*Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la Contraloría General de la República, regulará, mediante instrucciones de carácter general, los procedimientos de coordinación, su forma, plazos y períodos*”.

2.- El inciso final del artículo 7° establece la posibilidad de que el SAIG, a petición del Presidente, realice auditorías en los servicios a los que se le aplica este proyecto de ley, salvo si la CGR ya ha iniciado uno.

Los problemas que se advierten son 2:

- Las auditorías en curso de la CGR mantienen aspectos de carácter reservado, lo que podría dificultar al SAIG determinar si la auditoría solicitada mantiene los “mismos objetivos”; y

- El proyecto no contiene normas sobre lo que sucedería si la CGR inicia con posterioridad una auditoría en una institución en la que el SAIG ya la ha instruido. Por lo mismo, se sugiere regular tal situación, fijando los efectos de la misma.

3.- El proyecto no contempla acciones derivadas en relación con los hallazgos que se detecten en las auditorías realizadas por el SAIG, más allá de lo señalado en el literal h) del artículo 11.

4.- El artículo 19 no regula el deber de denunciar en el evento que se tome conocimiento de hechos ilícitos. Si bien se considera que igualmente están obligados a ello, debe advertirse que la expresión “*guardar absoluta reserva y secreto de la información*” (artículo 32) podría generar un problema en su interpretación, más aún si se considera que los integrantes del consejo no se rigen por las normas estatutarias que contemplan obligaciones funcionarias, como es el caso de la denuncia.

5.- En el artículo 26, se recomienda establecer una excepción para la entrega de información, respecto de los procesos de auditoría que lleve a cabo la CGR en un determinado servicio y que mantengan la calidad de reservados en atención a su etapa de desarrollo (por ejemplo, la imposibilidad de remitir preinformes).

Dispone el artículo 26: “*Los(las) auditores(as) internos(as) institucionales y los equipos de auditoría interna deberán proporcionar al SAIG la información que este estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el plazo que éste determine*”.

6.- Respecto al inciso primero del artículo 27, se debe señalar que la sujeción es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la ley, o bien, debiera realizarse una remisión directa al artículo 18 de la ley N° 10.336.

Prevé el artículo 27: “*Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán desarrollar sus funciones con sujeción a las normas, modelos, acciones y lineamientos técnicos fijados por el SAIG*”.

Terminada la presentación, el **Honorable Senador señor Coloma** solicitó al Ejecutivo emitir su opinión acerca de las observaciones planteadas por la señora Contralora subrogante a fin de comprender de mejor manera el marco de la discusión.

La **señora Subsecretaria** explicó que, tal como lo planteó la señora Contralora (S), se ha venido trabajando en conjunto este proyecto y, en ese sentido, la gran mayoría de las observaciones y comentarios planteados por la Contraloría durante el primer trámite constitucional de la iniciativa legal, fueron acogidos, como se ha desprendido de su presentación.

No obstante lo anterior, observó que la Contraloría ha formulado algunas inquietudes nuevas, las cuales se analizarán con detalle toda vez que la lógica de esta iniciativa es garantizar la coordinación y complementariedad en el ecosistema de control, de tal manera que efectivamente se cuente con un robusto control interno y que éste sea complementado con un robusto control externo, de modo de potenciar el resultado final.

Expresó que el Ejecutivo entiende la inquietud relativa a garantizar la tuición técnica por parte de la Contraloría General de la República regulada en el artículo 18 de su ley orgánica constitucional y en razón de ello es que ese punto ha quedado expresamente establecido en el artículo 8 del proyecto de ley.

Indicó que, si bien la señora Contralora (S) ha manifestado que lo anterior no permea al resto de las normas, razón por la cual debiera hacerse la salvedad de manera específica en cada uno de los artículos a que hace referencia, éste es un punto que será debidamente analizado manifestando la voluntad del Ejecutivo de continuar trabajando en conjunto a fin de hacer llegar indicaciones al proyecto de ley durante su discusión en particular.

El **Honorable Senador señor Insulza** expresó que desde un principio ha hecho presente sus reparos respecto de esta iniciativa y agregó que resulta difícil comprender la distinción que se hace entre una auditoría interna y una externa. Al respecto, señaló que, por una parte, la Contraloría General de la República es parte del Estado de Chile y, por otra, la Auditoría Interna que se propone es también parte del Estado de Chile e independiente.

Reiteró no comprender del todo la razón para contar con dos organismos que realicen una función bastante similar no obstante ser partidario de la existencia de controles.

Si bien expresó estar a favor de que el Gobierno cuente con una asesoría de modo de colaborar con los distintos organismos del sector público en materia de transparencia, reconoció que el hecho de proponer una especie de auditoría alternativa le genera dudas.

A lo anterior sumó lo señalado por la señora Contralora (S) en su presentación, referido a la eventual colisión que podría producirse entre el artículo 7, letra h) del proyecto de ley referido a la asesoría técnica del Servicio de Auditoría Interna del Gobierno (SAIG), respecto de los auditores y lo

establecido en el artículo 18 de la ley N° 10.336 relativo a la dependencia técnica de la Contraloría sobre los inspectores, auditores, etc., considerando que se está creando un órgano distinto y paralelo a la Contraloría General de la República.

En seguida, la Comisión escuchó al **ex Presidente del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, señor Rodrigo Moraga**, quien efectuó una exposición en base a una [carta](#) dirigida al Presidente de la Comisión, del siguiente tenor:

“H. Senador Ricardo Lagos W.

Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado

Junto con saludarlo y por su digno intermedio a cada uno de los integrantes de la Comisión de Hacienda que usted preside, deseo agradecer la invitación que se me ha cursado con motivo de la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Al respecto, conforme a lo que se me ha solicitado, me permito adjuntar texto de la carta, que, al término de su mandato, el presidente Frei Ruiz-Tagle remitiera a su gabinete de ministros en relación a la política de Auditoría de Gobierno impulsada desde el inicio de su administración. Dicha carta, estimo, resume adecuadamente las bases fundamentales, tanto doctrinarias como funcionales, que inspiraron dicha política y que se mantienen, en su esencia, absolutamente vigentes a la luz del proyecto en trámite.

Cabe mencionar que, al concluir el gobierno, se elaboró un proyecto de Ley que incorporaba a la Auditoría Interna de Gobierno en la estructura permanente del Estado, conforme nos lo solicitara la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 8 de octubre de 1998.


Es necesario relevar que, tanto el presidente Ricardo Lagos, como la presidenta Michelle Bachelet y el propio presidente Sebastián Pinera, profundizaron esta política fortaleciendo su funcionamiento y remitiendo, en más de una ocasión, sendos proyectos a tramitación legislativa.

Con esta iniciativa legal se corrige una insuficiencia, de origen, en el diseño funcional del Ejecutivo, en cuanto a dar forma sistemática y manifiesta al control jerárquico y/o deliberado que le corresponde ejercer al presidente de la república, a través de un instrumento orgánico regulado por ley, al servicio de presidente y su gobierno, conforme a su responsabilidad de administrarlo, establecida en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y las disposiciones complementarias consignadas en los Artículos 1º, 3º y 10º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del


Estado.

Es necesario diferenciar y precisar que las mencionadas materias, constituyen asuntos privativos del ámbito interno y propios del interés de la administración del gobierno, mientras que, a los organismos de control externo, les corresponde, esencialmente, emitir opiniones respecto a la actuación del Ejecutivo, dando garantías de independencia frente a la ciudadanía. No obstante, una adecuada coordinación entre ambos ámbitos de control, interno y externo, contribuye al resguardo del patrimonio del Estado y al ejercicio probo de la función pública.

Quedando a disposición de los H. Senadores para aclarar o ampliar mayores detalles sobre la materia en comento.”.



DAG-PR 014/2000



DE : EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE
Presidente de la República

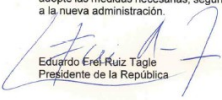
A : Gabinete de Ministros

FECHA: Santiago, marzo 6 de 2000

- 1 Con el fin de fortalecer las bases de una buena administración, al asumir mi mandato en marzo de 1994, dispuse, junto a otras medidas, la implementación de un sistema de Auditoría Interna Gubernamental que permitiera al Presidente de la República y a sus Ministros contar con información veraz y oportuna respecto de las áreas que presentan deficiencias en su gestión o que requieran de acciones que resguarden el funcionamiento probo y transparente del Ejecutivo.
- 2 El Control Externo, ejercido esencialmente por el Parlamento y la Contraloría General de la República, provee a la comunidad nacional de opiniones sobre la regularidad y legalidad de los actos del Ejecutivo, de tal modo que la ciudadanía, basada en fuentes independientes, pueda formarse una opinión confiable respecto de los actos de la administración. Sin embargo, desde el punto de vista de las responsabilidades y puntos de interés del Ejecutivo, no es suficiente el control ejercido desde el exterior, que por su naturaleza tiende a ser posterior a las decisiones y a su ejecución. Las autoridades de gobierno deben disponer de información y mecanismos preventivos, que le permitan asegurar el cumplimiento de sus objetivos, el acatamiento de la legalidad y el adecuado uso de los recursos públicos. Bajo estas circunstancias, el modelo ideal de control público en relación al Ejecutivo lo constituye una adecuada complementación del Control Externo y Control Interno, que contribuya al resguardo de la integridad del patrimonio del Estado.

Esta política, desde el punto de vista organizacional, se ha expresado en la creación de unidades de Auditoría Ministerial de alto nivel, bajo la conducción ejecutiva de las autoridades superiores de cada cartera. Hoy, cada secretaría de Estado cuenta con una de estas unidades a cargo de un profesional calificado. En 1997, por decreto supremo, fue creado el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, responsable de la coordinación, desarrollo institucional y técnico de esta política gubernamental, residiendo administrativamente en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El resultado del trabajo de este consejo se reporta directamente al Presidente de la República.

- 4 Anualmente he dispuesto objetivos gubernamentales de auditoría, lo que nos ha permitido examinar horizontalmente, en toda la administración, materias tales como: Contratos y Licitaciones, Consultorías Externas, Control Interno, Ambientes, Computacionales, Recursos Humanos, Conversión 2000 etc. Del resultado de estos exámenes se han desprendido diversas iniciativas, tanto administrativas como legislativas, tendientes a producir los perfeccionamientos del caso.
- 5 Esta experiencia chilena, de fortalecimiento de la gestión y transparencia de la acción del Ejecutivo, ha sido valorada internacionalmente como una acción inédita en Latinoamérica. Lo anterior se expresa en la suscripción, en el año 1997, de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos de América y en 1999 con el gobierno de Colombia. A lo anterior se debe agregar un nutrido intercambio, en este ámbito, con los gobiernos de Ecuador, Paraguay y República Dominicana. En Europa se ha discutido esta experiencia con los gobiernos del Reino Unido y Francia. En este sentido, cabe destacar la asistencia técnica otorgada al gobierno de Georgia en Europa del Este.
- 6 Corresponde especial mención a la estrecha cooperación con los organismos internacionales, especialmente con Transparencia Internacional, agencia encargada de producir el ranking internacional sobre probidad. Este organismo ha evaluado la experiencia chilena de Auditoría Gubernamental, incluyéndola en sus informes como una recomendación internacional sobre "mejores prácticas de administración". Cabe consignar que hoy Chile ocupa el lugar 19 en este ranking, lo que nos ubica a la cabeza de Iberoamérica.
- 7 Finalmente, hago propicia la ocasión para hacerles llegar el informe consolidado de la Auditoría Gubernamental correspondiente al año 1999 y que en esta ocasión correspondió a un "Examen integral de los sistemas de administración y control de los activos fijos y financieros, y de las tecnologías de procesos e información". Este informe ha sido preparado sobre la base de los informes que cada cartera elaboró sobre la materia. Los antecedentes y detalles de estos reportes se encuentran en la secretaría ejecutiva del Consejo de Auditoría de Gobierno. Lo anterior, para que cada cartera, con apoyo del CAIGG adopte las medidas necesarias, según corresponda y lo considere en el traspaso a la nueva administración.



Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República

Dist/Ciab

Asimismo, se refirió a las inquietudes planteadas por el Senador Insulza y explicó que las organizaciones, desde el punto de vista de su gestión y de sus resultados, tienen dos grandes interesados; éstos son sus dueños y el administrador. Añadió que la forma en que estos interesados ejercen ese interés es fundamentalmente a través del control.

Puntualizó que, en el caso de los bancos, por ejemplo, los accionistas ejercen el control a través de entidades externas independientes como Deloitte Chile, PwC, Ernest&Young, entre otras, de tal manera que los informes respecto de las actuaciones de esa empresa sean confiables para los accionistas

Refirió que, en el caso del Gobierno, para que efectivamente las opiniones que emite resulten confiables para la opinión pública, la ciudadanía recurre a organismos externos como la Contraloría General de la República, que goza de independencia respecto del Gobierno, la cual está dada por el mecanismo de designación y remoción del propio Contralor, de tal manera que pueda opinar con independencia de las actuaciones del Gobierno.

Puso de relieve que, en el caso del control interno que es del interés del administrador, éste requiere controlar fundamentalmente sus planes, sus metas y, en el caso del Gobierno, la legalidad de sus actuaciones, de manera que una vez sometido a controles externos se cumpla efectivamente con que las actuaciones se han ajustado a la normativa vigente.

Continuó señalando que, para ello, las empresas, como por ejemplo, el Banco de Chile, solicitan un auditoría interna que depende del más alto nivel organizacional, esto es el gerente o el directorio. En el caso de la Administración, la Auditoría Interna es un servicio de control que ésta se da a sí misma y que se encuentra regulado además por normas internacionales.

Reparó en que, en el caso del Gobierno, cuya administración corresponde al Presidente de la República, conforme lo establece artículo 24 de la Constitución Política de la República y que se especifica en los artículos 1°, 3° y 10 de ley orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado al señalar que debe ejercer el control jerárquico y/o deliberado, recurre a la herramienta principal de control interno que es la auditoría interna, la cual depende de él con el objeto de que el alcance de la labor de ese organismo tenga el mismo alcance que su responsabilidad.

Subrayó que lo anterior implica dos ámbitos de control absolutamente distintos; uno de ellos destinado a la opinión pública o al Parlamento y en el caso de la Auditoría Interna, el Gobierno se da a sí mismo este servicio para controlar su propia administración.

Hizo presente que hay otros organismos de control como la Cámara de Diputados, que ejerce control político, o los medios de comunicación, que ejercen un control por parte de la sociedad.

Acotó que una adecuada complementación de ambos controles permite un mejor resguardo del patrimonio del Estado y del clima de legalidad, de probidad, en el cual la Administración ejerce su labor. Relevó que, en consecuencia, son organismos de auditoría robustos.

Precisó que las indicaciones que se impartan por parte del SAIG deben revestir la legalidad necesaria para que la Administración las ejecute y no sean meramente un acto de voluntad o de discrecionalidad.

Señaló que las observaciones planteadas por la señora Contralora (s) son absolutamente superables atendido que se trata de cuestiones procedimentales u operacionales y añadió que los resguardos que propone resultan pertinentes.

Expresó que el proyecto de ley en su conjunto constituye una base importante para iniciar un servicio público de esta naturaleza que lleva esperando más de 30 años.

Finalmente, la Comisión escuchó a los **consejeros del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, señora Isabel Torres y señor Francisco Javier Lois**, quienes realizaron en conjunto una [presentación](#), en formato ppt., del siguiente tenor:

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO SAIG

Presentación de los consejeros independientes del CAIGG	Isabel Torres Zapata, PhD	Francisco Javier Lois Buono-Core
	Contador Público y Auditor USACH Master, Universidad de Zaragoza, España Doctora Universidad de Leipzig, Alemania Académica Asociada del Departamento de Contabilidad y Auditoría Universidad de Santiago de Chile	Contador Público y Auditor e Ingeniero Comercial USACH Magíster en Control de Gestión UdeChile Consultor internacional en Sistemas Fiduciarios Nacionales Ex funcionario BID, PwC, Washington D.C. y Chile, y ex Jefe de Auditoría SBIF

La auditoría interna gubernamental es una función ineludible en los tiempos actuales, pues la Administración del Estado debe dar cuenta, permanentemente, de una buena gobernanza, una adecuada rendición de cuentas y un buen uso de los recursos públicos. Por lo tanto, el ejecutivo debe reconocer y valorar el apoyo que le brinda la Auditoría interna de gobierno para el control de su gestión.

Auditoría Interna de Gobierno y el CAIGG

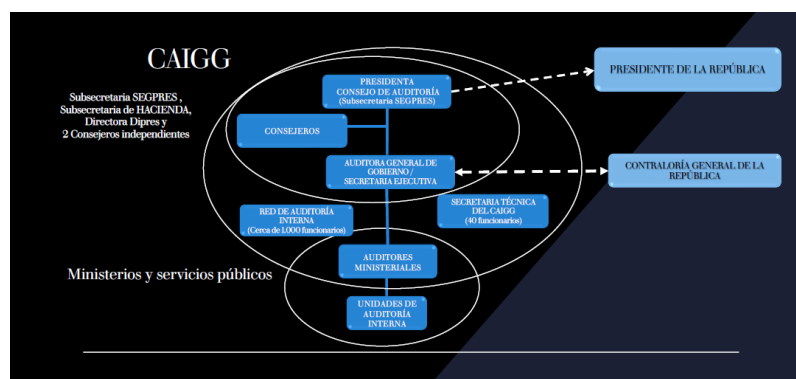
¿Qué es el CAIGG y cómo funciona?

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) es un órgano asesor del Presidente de la República en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa.

La entidad ejecutora es la Secretaría Técnica del CAIGG, que tiene un director (Auditora General de Gobierno) y un equipo que trabaja en el desarrollo y puesta en práctica de las políticas de auditoría en la Red de Auditoría del Sector Público.

El CAIGG en Chile, adapta y adopta las Normas Nacionales e

Internacionales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos, (THEIIA), anteriormente NIEPAI (Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna).



¿Cuál ha sido el aporte del CAIGG?

Los principales aportes desde su creación son múltiples, entre ellos destacamos:

- Apoyar la labor del ejecutivo en la revisión de la gestión ministerial.
- Promover la creación de Unidades de Auditoría Interna en todos los Servicios Públicos.
- Proponer al ejecutivo los Objetivos Gubernamentales de Auditoría Interna a desarrollarse en toda la Administración del Estado.
- Promover una mayor valoración de la función de auditoría interna.
- Establecer procesos de gestión de riesgos en base a estándares

globales (ISO 31000, COSO RM, entre otros).

- Contribuir al mejoramiento de la gestión pública a través de los procesos de gestión de compras públicas, financiamiento y lavado de activos, pronto pago, entre otras.

- Capacitar y mantener en constante actualización normativo a la Red de Auditoría Interna

- Entre otros aspectos, esto ha permitido la implementación de las recomendaciones de la OECD, Banco Mundial, BID, y de cumplimiento de acuerdos internacionales en aspectos fiduciarios.

Visión internacional de los órganos de auditoría interna

De acuerdo a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”), los gobiernos necesitan un órgano asesor que en forma cercana y oportuna les permita conocer si se han cumplido las metas que se ha fijado y los riesgos que podrían impedir o retrasar ese cumplimiento. (Performance Budgeting in OECD Countries. París, 2007).

En tal sentido, la auditoría interna gubernamental se transforma en un colaborador directo de las autoridades del Estado, contribuyendo a que la Administración del Estado cumpla su misión, alcance sus objetivos y mejore los procesos administrativos, operativos, legales y de gestión, agregándole valor a su quehacer. Por ello, la auditoría interna ejerce una labor esencial, ayudando a mejorar el desempeño, la probidad y la transparencia, la aplicación de las normas, los impactos en la imagen pública y el adecuado uso en los recursos mediante la evaluación y la recomendación de mejoras en la gestión y el desempeño del órgano de la Administración del Estado respectivo.

Recomendación de Organismos Multilaterales

La **OCDE**, en el informe “Revisiones sobre la Gobernanza Pública. Entidad Fiscalizadora Superior de Chile. Mejorando la agilidad estratégica y la confianza pública” de 2014; el Banco Interamericano de Desarrollo, en los informes “Práctica de Auditoría Interna Gubernamental 2013” y “Evaluación del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas 2008”; y el **Banco Mundial** en el Informe de “Evaluación de Responsabilidad Financiera Pública de 2005”, señalaron expresamente que la auditoría interna gubernamental en **Chile no cuenta con una institucionalidad propia a nivel legal y que este aspecto debía ser mejorado.**

Recientemente, la OCDE ha efectuado una serie de recomendaciones con la finalidad de fortalecer el marco normativo y las

labores de auditoría interna gubernamental, **sugiriendo la incorporación de nuevas facultades y atribuciones**, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: formular lineamientos técnicos; realizar labores de coordinación entre las distintas unidades de auditoría; que las unidades de auditoría cuenten al menos con dos profesionales; que los profesionales de las unidades de auditoría cumplan con competencias técnicas para ejercer como auditores; entre otras (OCDE, 2022).

Incorporación de la Auditoría Interna de Gobierno en el Estado

Una revisión a la incorporación de la función de Auditoría Interna en la estructura institucional del Estado a nivel internacional se señala que:

En Latinoamérica predomina el hecho de esta función se encuentra inserta orgánicamente en el Poder Ejecutivo (Presidencia de la república, en uno o más ministerios). A modo de ejemplo, se puede mencionar a Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y México entre otros. Una situación similar ocurre en la mayoría de los países miembros de la OCDE, dentro de ellos Francia, España, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, entre otros países.

Informe: Diagnóstico sobre prácticas de Auditoría Interna		RECOMENDACIONES DEL INFORME					
INDICADORES PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE AUDITORÍA INTERNA		<p>1. Continuidad del Fortalecimiento de la Auditoría Interna de Gobierno (otorgarle institucionalidad al organismo)</p> <p>2. Aseguramiento de Calidad</p> <p>3. Oportunidades de interacción y coordinación con la Auditoría Externa de Gobierno (CGR)</p> <p>4. Fortalecimiento de las actividades de capacitación de los auditores internos</p> <p>5. Evaluación de actualización y capacitación de auditores internos</p> <p>6. Seguimiento a las Observaciones de las Auditorías Externas de proyectos por las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones</p>					
<i>"El Subsistema de Auditoría Interna es un medio apropiado que puede ser utilizado para la supervisión de las operaciones financieras de los proyectos"</i>							
Indicadores	Nivel de Desarrollo						
1	Disponen de una función de Auditoría Interna establecida en las Entidades y Organismos Públicos, la cual cumple normas profesionales para evaluar el control interno y proporcionar recomendaciones para el mejoramiento continuo			3.0			
2	Disponen de un órgano/entidad que emite las normas y procedimientos por los cuales se rige el funcionamiento de la función de Auditoría Interna			3.0			
3	Disponen de Manuales de Auditoría Interna Gubernamental en los cuales se detallan las normas de auditoría interna aplicables, los programas y procedimientos a seguir para la realización de las auditorías/revisiones.			3.0			
4	Están previstos mecanismo de capacitación/actualización para la formación permanente de los Auditores Internos.			2.0			
5	Se ha establecido un sistema de control de calidad que asegure razonablemente que sus resultados se basan en evidencia suficiente y competente de la materia examinada.			1.0			
6	La función de Auditoría Interna responde a la máxima autoridad ejecutiva del ente público			3.0			
7	La función de auditoría interna en los entes públicos se desempeña a posteriori de las transacciones y actividades que el ente realiza			3.0			
8	Se efectúan regularmente auditorías internas, centradas en: a) la confiabilidad de la información financiera y operativa; b) la eficacia y eficiencia operacional; c) el cumplimiento de las normas de procesamiento y registro de transacciones y operación de los controles.	3.0					
<table border="1"> <tr> <td>Puntaje Promedio</td> <td>2.62</td> </tr> <tr> <td>Nivel de Desarrollo</td> <td>Alto</td> </tr> </table>		Puntaje Promedio	2.62	Nivel de Desarrollo	Alto		
Puntaje Promedio	2.62						
Nivel de Desarrollo	Alto						
Fuente: BID, 2015							



Creación del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG)

¿Por qué es necesaria una Ley para la Auditoría de Gobierno?

El CAIGG actualmente solicita la implementación de la Política de Auditoría Interna de Gobierno a través de instructivos presidenciales denominados Objetivos Gubernamentales de Auditoría Interna, que define cada presidente al asumir el cargo, sin embargo, no tiene cómo obligar a los servicios que reporten, dada su calidad de programa presupuestario.

Institucionalizar la función de auditoría interna, mediante la creación de un servicio estable con patrimonio propio, presupuesto y marco legal, permite asegurar la permanencia de la función, con apego a los estándares internacionales que guían su actuar y establecer una Política de Auditoría Interna de Gobierno, como una visión de largo plazo.

Una ley contribuye a garantizar la transparencia, ayuda a prevenir la corrupción, a mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno.

¿Cuáles son las nuevas atribuciones?

Las nuevas atribuciones entre otras, son:

- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría, junto con velar por la correcta implementación de las recomendaciones surgidas en procesos de auditoría interna - Realizar actividades de asesoría

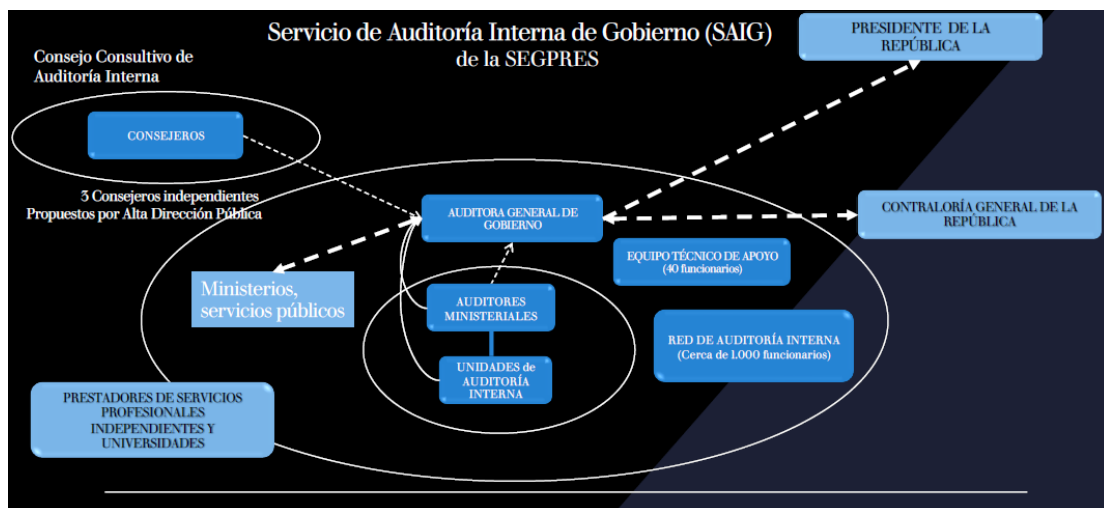
- Realizar auditorías a requerimiento del Presidente(a) de la República, siempre y cuando la CGR no esté realizando la misma labor

- Asesorar técnicamente a los(las) auditores(as) institucionales y a los equipos de auditoría interna, entre otras.

- Podrá informar a los ministros, subsecretarios y encargados de los servicios de los hallazgos de las actividades de aseguramiento en las entidades a su cargo.

- Contratar servicios externos y establecer convenios internacionales de cooperación.

Todas estas nuevas funciones tienen por finalidad garantizar que el SAIG podrá colaborar, agregar valor y efectuar un control preventivo respecto a los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la administración del Estado.



Consejo Consultivo de Auditoría Interna

Órgano asesor formado por 3 miembros independientes escogidos a través del Consejo de Alta Dirección Pública, cuyas funciones son:

a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales y reglamentarias en materias de su competencia.

b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos.

c) Opinar oportuna y justificadamente sobre el contenido de la Política de Auditoría General de Gobierno, propuesta por el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Propuestas no vinculantes

Duración: 3 años / Sesiones semestrales

¿Cómo se relaciona con los otros órganos de control del Estado?

Para que el servicio pueda cumplir con todas las funciones que le encomienda el proyecto de ley, el artículo 33 señala que este podrá requerir la colaboración de los distintos órganos de la administración del Estado, junto con pedir toda la información y documentos que sean necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 8 del proyecto de ley consagra expresamente que el SAIG ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con la CGR, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales que correspondan a dicho organismo.

Reflexión final

La existencia de un organismo de coordinación que ha funcionado a través de los Objetivos Gubernamentales de auditoría interna, el CAIGG, a pesar de no haber tenido toda la institucionalidad que se requiere ha ayudado a establecer procesos de auditoría en los servicios, capacitado a los auditores y ha valorado y fortalecido la función de auditoría interna de gobierno, generando aportes relevantes a la administración del Estado. En este periodo la gestión del CAIGG ha sido evaluada positivamente por organismos internacionales como la OECD y el BID, no obstante, reconociendo la fragilidad legal, han recomendado institucionalizar la auditoría interna de gobierno. A la fecha se han realizado grandes esfuerzos desde las distintas administraciones de gobierno en estos 27 años, por mantener la continuidad de la función, incluyendo dos proyectos de ley fallidos, por lo que de aprobarse el proyecto de ley a su consideración, la Auditoría Interna de Gobierno pasaría a formar parte de la estructura permanente del Estado, eliminando la fragilidad y el relativo cumplimiento de sus indicaciones, permitiendo la continuidad de sus funciones, y estableciendo bases sostenibles para una gestión de la administración del Estado moderna y proactiva por medio del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG).

Finalizada la presentación, la **señora Subsecretaria** ratificó lo señalado por el señor Moraga en cuanto a la importancia del control interno agregando que es uno más dentro del ecosistema de control.

Enfatizó que el control interno que se propone es complementario y coadyuvante del control externo y puntualizó que su rol es más bien de carácter

preventivo y con un foco distinto del que realiza la Contraloría General de la República, por ello se habla de complementariedad entre ambos.

Manifestó que las observaciones formuladas por la Contraloría apuntan a garantizar la debida coordinación entre ambos servicios y resultan muy relevantes, de manera tal que manifestó la voluntad por parte del Ejecutivo para poder avanzar en este proyecto de ley e institucionalizar un servicio de esta naturaleza que cumple una labor muy fundamental para el buen funcionamiento del Estado y que se encuentra incluido dentro de aquellas iniciativas incluidas en el “*Fast Track Económico*”.

C.-Votación en general.

- Puesto en votación el proyecto de ley, en general, fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Kast y Lagos, con la abstención del Honorable Senador señor Insulza.

- - -

INFORMES FINANCIEROS

El Informe Financiero N° 206, de 26 de septiembre de 2023, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señala de modo textual lo siguiente:

“I. Antecedentes

La presente iniciativa crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG), como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el(la) Presidente(a) de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El SAIG tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

El SAIG elaborará la Política de Auditoría General de Gobierno, un instrumento que contiene los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos, durante

un período de cinco años. Además, establece que los órganos de la Administración del Estado deberán elaborar un Plan de Auditoría Interna, que fijará el trabajo a desarrollar en materia de auditoría interna para un periodo determinado, de acuerdo a los lineamientos estratégicos establecidos en la Política.

La dirección superior, la organización y la administración del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno corresponderá al Auditor(a) General de Gobierno, quien será el(la) jefe(a) de servicio.

Además se considera la creación de un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, cuya función será asesorar al (a la) Auditor(a) General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos. El Consejo estará constituido por tres personas, y tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a dos unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de seis sesiones por año calendario.

Asimismo, se crea la Red de Auditoría Interna, conformada por los (las) auditores(as) ministeriales, auditores(as) internos(as) institucionales, y tendrá por objeto coordinar las labores en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos de forma transversal.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Para la conformación del Servicio se considera el traspaso del personal existente del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, cuyo financiamiento está en la partida presupuestaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y además, la incorporación de 9 personas para el refuerzo de las funciones de administración y finanzas.

También se consideran las dietas de los consejeros, quienes deben asesorar al (a la) Auditor (a) General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

Así, el mayor costo del proyecto de ley es el que se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1: Costo por año proyecto de ley (M\$ 2023)

Ítem	Año 1	Régimen
Subtítulo 21	306.729	306.729
Subtítulo 22	17.358	17.358
Subtítulo 29	14.940	0
Total	339.027	324.087

Con ello, la presente iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual estimado de \$339.027 miles el primer año y \$324.087 en régimen.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

III. Fuentes de información

- Mensaje N° 172-371 de S.E. el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que crea el Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Septiembre 2023). Minuta Proyecto de Ley Servicio Auditoría Interna de Gobierno. Santiago, Chile.

- Ley de Presupuestos del Sector Público, 2023.”.

Luego, se presentó el informe financiero **complementario N° 20**, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 16 de enero de 2024, que es del siguiente tenor:

“I. Antecedentes

Las presentes indicaciones (N°304-371) buscan perfeccionar el proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAIG).

Así, mediante estas indicaciones se aclara que el SAIG será el órgano encargado de dirigir y coordinar la Red de Auditoría Interna. Además, dentro de las definiciones del proyecto de ley establece qué se entenderá por "Actividades de Aseguramiento", "Eficacia" y "Eficiencia".

También se indica que dentro de las atribuciones del SAIG está que, excepcionalmente, podrá realizar auditorías, a requerimiento del (de la) Presidente(a) de la República, en los órganos en los que tiene competencia, salvo en los casos en que se encuentre en curso una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en el mismo organismo y con los mismos objetivos.

En relación con el Consejo Consultivo de Auditoría Interna, se aclara cómo se declaran las causales de cesación, y qué sucede en caso de

que sesione con la asistencia de dos consejeros (as).

Por último, con respecto de la Red de Auditoría Interna, se establece que esta será dirigida y coordinada por el SAIG, y tendrá por objeto una aplicación transversal de las materias de su competencia.

II. Efecto del proyecto de ley sobre el Presupuesto Fiscal

Al tratarse de modificaciones normativas, las presentes indicaciones **no irrogarán mayor gasto fiscal respecto del ya señalado en el Informe Financiero N°206 del año 2023.**

III. Fuentes de información

- Mensaje N° 304-371 de S.E. el Presidente de la República, con el que formula indicaciones al proyecto de ley que crea el Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17, inciso segundo, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y que la Comisión de Hacienda propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY:

“PÁRRAFO 1° Disposiciones Generales

Artículo 1.- Créase el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, en adelante también “el Servicio” o “SAIG”, como un servicio público descentralizado, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente o Presidenta de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El domicilio del Servicio será la ciudad de Santiago.

Artículo 2.- El Servicio tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, a través de actividades de aseguramiento y asesoramiento en materia de auditoría interna, que contemplen el análisis de la gestión respecto de la economía, eficiencia y eficacia; del cumplimiento de las normas y procedimientos; de la protección de los recursos públicos y de la probidad; de la ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

Para lograr dicho objeto, el SAIG será el órgano encargado de dirigir y coordinar la Red de Auditoría Interna, señalada en el párrafo 5°, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.

Artículo 3.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los órganos señalados en el inciso segundo del artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con excepción de la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de Educación Superior de carácter estatal.

Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones exceptuadas en el inciso precedente podrán solicitar voluntariamente la asesoría del SAIG, lo que se materializará a través de la suscripción de uno o más convenios.

Artículo 4.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

a) Actividades de Aseguramiento: Labores de auditoría que implican una revisión objetiva de los respectivos antecedentes, con el propósito de evaluar con independencia los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobernanza de los órganos a que se refiere el artículo 3.

b) Actividades de Asesoramiento: Labores de consultoría, asesoría y servicios relacionados, que tienen por finalidad mejorar la gestión de riesgos, el control interno y la gobernanza de los órganos señalados en el artículo 3.

c) Auditor Interno Institucional: Es quien ejerce la máxima autoridad en la actividad de auditoría interna dentro de los órganos a que se refiere el artículo 3, responsable dentro de éstos de la gestión efectiva de dicha actividad. El nombre o denominación del cargo podrá variar en cada

institución. En el caso de los auditores internos institucionales de los ministerios, les corresponderá, entre otras funciones, coordinar el trabajo de los auditores y las auditoras de la respectiva Secretaría de Estado, en relación con los ámbitos de su competencia.

d) Auditoría Interna: Actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoramiento, concebida para mejorar las operaciones de los órganos a que se refiere el artículo 3. Tiene por finalidad contribuir a que dichas entidades cumplan con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar sus procesos de gestión de riesgos, control interno y gobernanza.

e) Control Interno: Proceso efectuado por todo el personal de alguno de los órganos señalados en el artículo 3, a fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos fijados dentro de las siguientes categorías: economía, eficiencia y eficacia; cumplimiento de las normas y procedimientos; protección de los recursos públicos y probidad; ejecución de las políticas, programas y decisiones de la respectiva autoridad.

f) Economía: Capacidad de los órganos señalados en el artículo 3 para generar y administrar adecuadamente los recursos financieros, en el cumplimiento de su misión institucional.

g) Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la organización gubernamental, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. La calidad del servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la organización gubernamental para responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios.

h) Eficiencia: Relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar aquellos. Se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.

i) Gestión de Riesgos: Proceso estructurado, consistente y continuo, implementado transversalmente en los órganos a que se refiere el artículo 3, con el fin de detectar, evaluar, medir y reportar amenazas que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos, e identificar oportunidades para reducirlas.

j) Gobernanza: Combinación de sistemas, procesos y estructuras organizativas, implementados por quien ejerza la jefatura superior de los órganos señalados en el artículo 3, para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de dicho órgano, con el fin de lograr sus objetivos.

k) Lineamientos Técnicos: Conjunto de directrices, procedimientos y medidas, en materia de gobernanza, probidad, gestión de riesgos, control interno o auditoría interna, fijados por el SAIG dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 5.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno elaborará la Política de Auditoría General de Gobierno, en adelante también la "Política", y la propondrá para su presentación y posterior aprobación del Presidente o de la Presidenta de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Durante la elaboración de la Política deberá considerar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna, señalado en el artículo 12.

La Política es un instrumento que contiene los lineamientos estratégicos en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos que deben seguir los órganos señalados en el artículo 3, durante un período de cinco años.

Corresponderá al Servicio revisar la Política, al menos, a la mitad del período de su vigencia. De estimarlo necesario, propondrá su actualización al Presidente o a la Presidenta de la República.

Artículo 6.- Los órganos a los que se refiere el artículo 3 deberán elaborar un Plan de Auditoría Interna, que fijará el trabajo a desarrollar en materia de auditoría interna para un periodo de un año calendario, de acuerdo con los lineamientos estratégicos establecidos en la Política señalada en el artículo anterior. Dicho plan deberá individualizar cada trabajo específico que lo compone.

El Plan será aprobado por quien ejerza la respectiva jefatura superior de los órganos señalados en el artículo 3, previo informe técnico del Servicio, el que tendrá el carácter de vinculante.

PÁRRAFO 2° Funciones y Atribuciones

Artículo 7.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Asesorar al Presidente o a la Presidenta de la República, a ministros o ministras, a subsecretarios o subsecretarias y a las autoridades superiores de los órganos señalados en el artículo 3, en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

b) Proponer a las personas señaladas en el literal a) normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos de los órganos mencionados, y a promover la estricta observancia de la probidad administrativa y el debido uso de los recursos públicos asignados para el cumplimiento de sus programas y responsabilidades institucionales.

c) Proponer al Presidente o a la Presidenta de la República la Política de Auditoría Interna de Gobierno, para lo cual deberá previamente escuchar la opinión del Consejo Consultivo de Auditoría Interna.

d) Proponer al Presidente o a la Presidenta de la República modificaciones legales y reglamentarias en materias relacionadas con el ámbito de su competencia.

e) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de aseguramiento y asesoría en los órganos señalados en el artículo 3. Asimismo, revisar la correcta implementación de las recomendaciones surgidas en sus procesos de auditoría interna.

f) Realizar actividades de asesoría en los órganos señalados en el artículo 3, de forma transversal, y con especial énfasis en la revisión de la economía, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

g) Formular, adoptar o adaptar normas técnicas para las actividades de auditoría interna que realicen los órganos a que se refiere el artículo 3.

h) Asesorar técnicamente a los auditores internos institucionales y a equipos de auditoría interna, según corresponda, en la elaboración de los planes de auditoría interna de los órganos señalados en el artículo 3; evaluar sus resultados, otorgar retroalimentación de éstos, e informar de ellos al Presidente o a la Presidenta de la República.

i) Formular modelos y lineamientos técnicos sobre la base de las normas técnicas señaladas en el literal g).

j) Formular, adoptar o adaptar modelos de competencia, perfiles profesionales y programas de aseguramiento y mejora de la calidad, entre otros, en materia de auditoría interna para los órganos referidos en el artículo 3.

k) Formular esquemas de formación, capacitación y certificación profesional para los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, a través de normas, modelos y lineamientos técnicos relacionados con el ámbito de sus competencias. Asimismo, podrá realizar difusión técnica en tales materias y recomendar a los órganos referidos en el artículo 3

estrategias de capacitación para dichos funcionarios.

l) Informar a las personas indicadas en el literal a) sobre el nivel de cumplimiento del respectivo órgano, de los requerimientos del SAIG; de la aplicación de normas, modelos y lineamientos técnicos definidos por este último; de los resultados de los trabajos de aseguramiento y asesoramiento realizados; y del nivel de implementación de recomendaciones de auditoría y/o compromisos asumidos en sus respectivos planes de auditoría interna.

m) Contratar o convenir con personas naturales u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, la ejecución de trabajos específicos de aseguramiento y asesoramiento, y/o la realización de estudios, investigaciones y asistencia técnica.

n) Solicitar a los auditores institucionales y equipos de auditoría interna, según corresponda, la ejecución de actividades de aseguramiento y de asesoramiento específicas.

o) Requerir a las personas a que se refiere el literal a), a los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, información general y específica en materias vinculadas a la auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos del respectivo órgano, servicio o entidad.

p) Proporcionar a las personas señaladas en el literal a), a los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, la evaluación técnica de las actividades que los respectivos órganos realizan en materia de auditoría interna.

q) Velar por la coordinación y cooperación técnica entre organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en el ámbito de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

r) Propiciar y promover actividades de aseguramiento y asesoramiento en materias de probidad y transparencia administrativa, en el marco de la ley y los instrumentos internacionales vigentes al respecto, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos en la materia.

s) Cumplir con las demás funciones y atribuciones que le encomienden las leyes.

El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, excepcionalmente, podrá realizar auditorías, a requerimiento del Presidente o de la Presidenta de la República, en los órganos señalados en el artículo 3. Lo anterior, salvo en los casos en que se encuentre en curso una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en el mismo organismo y con los mismos objetivos.

Artículo 8.- El Servicio de Auditoría Interna de Gobierno ejercerá sus funciones y atribuciones en coordinación con la Contraloría General de la República, y sin perjuicio de las facultades que constitucional y legalmente corresponden a esta última, en particular respecto a la dependencia técnica que ésta ejerce sobre los auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna, de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.

PÁRRAFO 3° Organización y Estructura

Artículo 9.- La dirección superior, la organización y la administración del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno corresponderá al Auditor o Auditora General de Gobierno, quien será el jefe o la jefa superior del Servicio.

El Auditor o la Auditora General de Gobierno deberá contar con un título profesional o grado académico de licenciado o licenciada de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado, o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente, y acreditar una experiencia laboral en materias de auditoría interna no inferior a 10 años.

Artículo 10.- Al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno le será aplicable lo establecido en el Título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

Artículo 11.- El Auditor o la Auditora General de Gobierno tendrá especialmente, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de jefe superior del Servicio.

b) Dictar los reglamentos internos y las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

c) Ejecutar los actos y celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá adquirir, administrar y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

d) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios o funcionarias del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, en materias de gestión interna.

e) Determinar, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal, la estructura organizativa interna del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

f) Rendir cuenta anualmente de su gestión al Presidente o a la Presidenta de la República, a través de una memoria o balance institucional.

g) Remitir informes trimestrales al Presidente o a la Presidenta de la República que den cuenta de los principales hallazgos y compromisos para superarlos, derivados de los trabajos realizados en los órganos señalados en el artículo 3, en las materias propias de su competencia, con el objetivo de informar respecto del funcionamiento de dichos órganos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política de Auditoría General de Gobierno y de los planes de auditoría interna de dichas instituciones. Asimismo, manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la antedicha Política y en los planes de auditoría interna, y proponer medidas de corrección y mitigación. Copia de estos informes deberán enviarse al Ministro o Ministra de la Secretaría General de la Presidencia.

h) Considerar la opinión y los acuerdos del Consejo señalado en el artículo 12.

i) Cumplir las demás funciones y atribuciones que establezcan las leyes.

PÁRRAFO 4°

Del Consejo Consultivo de Auditoría Interna

Artículo 12.- Créase un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, cuya función será asesorar al Auditor o a la Auditora General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos. En el cumplimiento de estas funciones deberá:

a) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de modificaciones legales y reglamentarias en materias de su competencia.

b) Asesorar oportunamente sobre las propuestas de normas, modelos, acciones e instrumentos que tiendan a fortalecer la auditoría interna, la gobernanza, el control interno y la gestión de riesgos.

c) Opinar oportuna y justificadamente sobre el contenido de la Política de Auditoría General de Gobierno, propuesta por el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Las opiniones, pronunciamientos, estudios y propuestas del Consejo serán remitidos al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Deberán ponerse a disposición del público a través de la página web institucional del Servicio, en el plazo máximo de treinta días corridos desde dicha remisión.

El Auditor o la Auditora General de Gobierno podrá concurrir a las sesiones del Consejo y tendrá derecho a ser oído por el éste cada vez que lo estime conveniente.

Artículo 13.- El Consejo estará constituido por tres personas, de vasta experiencia profesional y/o académica comprobada, en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y/o gestión de riesgos, designadas por el Presidente o la Presidenta de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley N° 19.882, uno de las cuales será designada por el Presidente de la República como el Presidente o la Presidenta del Consejo.

Los consejeros o consejeras durarán en su cargo tres años, a contar de su nombramiento. Éste podrá prorrogarse por un período sucesivo, por una sola vez.

Artículo 14.- Quienes integren el Consejo tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a dos unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un tope de seis sesiones por año calendario. Para tales efectos se considerarán tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba el consejero o la consejera. Los y las integrantes del Consejo que tengan que trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual para asistir a sus sesiones, tendrán derecho a percibir un viático equivalente al que corresponda a un funcionario del grado 5 de la Escala Única de Sueldos.

Artículo 15.- La calidad de Consejero o Consejera será incompatible con el ejercicio de los cargos de diputado o diputada, senador o senadora, delegado o delegada presidencial regional o provincial, alcalde o alcaldesa, concejal, gobernador o gobernadora regional, consejero o consejera regional, miembro del escalafón primario del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario o funcionaria de la Administración del Estado, funcionario o funcionaria del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos.

Artículo 16.- Quienes integren el Consejo estarán inhabilitados, mientras sean parte de éste, para prestar servicios en materias de auditoría interna, procesos de gestión de riesgos, control interno y de gobernanza a los órganos señalados en el artículo 3.

Artículo 17.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero o consejera las siguientes:

- a) Expiración del período para el que fue nombrado.
- b) Renuncia voluntaria.
- c) Condena a pena aflictiva.
- d) Incapacidad psíquica o física sobreviniente para el desempeño del cargo.
- e) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad a las que se refieren los dos artículos anteriores.
- f) Incumplimiento grave y manifiesto de las normas sobre probidad administrativa. Se entenderá como tal el incumplimiento de las normas señaladas en el artículo 18, particularmente, el incumplimiento del deber de abstención.
- g) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones como consejero. Se entenderá como falta grave, entre otras, la inasistencia injustificada a dos sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del Consejo, ordinarias o extraordinarias, durante un mismo año calendario, así como el incumplimiento del deber de reserva y secreto establecido en el artículo 19.

Las causales establecidas en los literales d) y e) precedentes, serán declaradas mediante acuerdo adoptado por unanimidad de los miembros del Consejo, en el que no tendrá derecho a voto el(la) consejero(a)

respecto del cual se pretendan hacer efectivas. En caso de no conseguir el quorum necesario, la causal se entenderá rechazada.

La verificación de las causales señaladas en los literales f) y g) será realizada por el resto de los consejeros y consejeras, en sesión convocada especialmente para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento.

Las vacantes serán proveídas mediante el mismo procedimiento de selección. El Consejo de Alta Dirección Pública dispondrá de un plazo de noventa días contado desde la vacancia del cargo, para proponer la terna al Presidente o a la Presidenta de la República. El nuevo miembro ejercerá sus funciones por un plazo de tres años.

Artículo 18.- A quienes integren el Consejo les serán aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y particularmente, el deber de abstención establecido en el artículo 12 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Asimismo, les serán aplicables las normas contenidas en la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y en particular, estarán obligados u obligadas a realizar la declaración de intereses y patrimonio establecida en el Título II de dicha ley.

Artículo 19.- Quienes integren el Consejo deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar en conformidad a la ley.

Artículo 20.- Para el buen funcionamiento del Consejo, el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno proporcionará el apoyo administrativo y de servicios, así como el personal que requiera para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 21.- El Consejo sesionará semestralmente, previa citación de su Presidente o Presidenta. De forma extraordinaria, podrá sesionar a requerimiento del Auditor o Auditora General de Gobierno.

Artículo 22.- El Consejo sesionará con la asistencia de, al menos,

dos de sus integrantes y adoptará sus acuerdos con el voto favorable de los asistentes.

En caso que sólo asistan dos de sus integrantes, de no llegar a acuerdo resolverán la diferencia en la sesión siguiente mediante el voto de quien estaba ausente.

Artículo 23.- Un reglamento establecerá las demás normas de organización y funcionamiento del Consejo que sean necesarias.

PÁRRAFO 5° Red de Auditoría Interna

Artículo 24.- La Red de Auditoría Interna será dirigida y coordinada por el Servicio y estará conformada por los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna. Tendrá por objeto una aplicación transversal de las materias de su competencia, en los órganos señalados en el artículo 3.

Artículo 25.- Los órganos señalados en el artículo 3 deberán contar con una Unidad de Auditoría Interna, la que debe incluir al menos dos funcionarios o funcionarias, quienes deberán cumplir con los perfiles técnicos y modelos de competencia definidos por el Servicio.

Las unidades de auditoría interna, conformadas por los auditores internos institucionales y los equipos auditoría interna, según corresponda, deberán prestar servicios de aseguramiento y asesoría en materias de gobernanza, gestión de riesgos y control interno en sus respectivas instituciones.

Artículo 26.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán proporcionar al SAIG la información que éste estime necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en el plazo que éste determine.

Artículo 27.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán desarrollar sus funciones con sujeción a las normas, modelos, acciones y lineamientos técnicos fijados por el SAIG. Asimismo, deberán concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el SAIG y a las actividades de capacitación desarrolladas por éste.

Los funcionarios y las funcionarias a que se refiere el inciso anterior no podrán asumir responsabilidades de gestión dentro de los órganos en que desempeñen sus funciones, y deberán atenerse a los lineamientos que se dicten por el Servicio u otras entidades competentes, sobre conflicto de interés y probidad.

Artículo 28.- Los auditores internos institucionales y los equipos de auditoría interna deberán realizar la declaración de patrimonio e intereses establecida en el Título II de la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.

PÁRRAFO 6° Patrimonio

Artículo 29.- El patrimonio del SAIG estará constituido por:

a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público y los recursos que le entreguen otras leyes generales o especiales.

b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales, que se le transfieran o que adquiriera a cualquier título.

c) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario, las que estarán exentas del trámite de insinuación, a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y del impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la ley N° 16.271 de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

d) Los aportes que reciba a cualquier título para el desarrollo de sus actividades por concepto de cooperación internacional.

Artículo 30.- El SAIG estará sometido al decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, y a sus disposiciones complementarias.

PÁRRAFO 7° Del Personal

Artículo 31.- El personal del SAIG se regirá por las disposiciones de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda y, en materia de remuneraciones, a las

normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Artículo 32.- El personal del SAIG deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar en conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, en su caso, de conformidad a la ley.

PÁRRAFO 8° Otras Disposiciones

Artículo 33.- Para el ejercicio de sus funciones, el SAIG podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos señalados en el artículo, y pedir toda la información y documentos necesarios para la revisión de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia, incluidos datos personales. Además, podrá realizar el tratamiento de dichos datos personales con el fin de ejercer el control, coordinación y supervisión en las materias de su competencia.

Artículo 34.- Las referencias que las leyes, reglamentos y demás normativa vigente hagan al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno o al CAIGG, se entenderán hechas al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno o SAIG, según corresponda.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Facúltase al Presidente o a la Presidenta de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, establezca por medio de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

En el ejercicio de esta facultad deberá dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta que fije. En especial, podrá determinar el número de cargos y grados de la escala única de sueldos para ésta, podrá establecer la gradualidad en que los

cargos serán creados; los requisitos específicos para el ingreso y promoción de dichos cargos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Asimismo, podrá determinar los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el título VI de la ley N° 19.882. Igualmente, determinará las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

Además, podrá establecer las normas de encasillamiento de personal en las plantas que fije. Igualmente, podrá establecer el número de cargos que se proveerán de conformidad a las normas de encasillamiento.

2. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios y funcionarias titulares de planta y a contrata desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Además, podrá determinar la forma en que se realizará el traspaso, y el número de funcionarias y funcionarios traspasados por estamento y calidad jurídica, y se podrá establecer, además, el o los plazos en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario o funcionaria traspasada se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima del personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso del personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

3. Determinar la fecha de entrada en vigencia de las plantas que fije, del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, el cual podrá contemplar un período de implementación y otro de entrada en operaciones. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de dicho Servicio, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

4. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios y las funcionarias titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de su residencia habitual fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de

remuneraciones ni modificación de los derechos previsionales de quienes tengan un cargo titular de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que les correspondan, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

c) Quienes sean traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

5. Además podrá disponer el traspaso, en lo que corresponda, de toda clase de bienes desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

Artículo segundo.- El Presidente o la Presidenta de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno y traspasará a él los recursos necesarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que cumplan sus funciones. Asimismo, dicho decreto podrá crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, subtítulos, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo tercero.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo cuarto.- El reglamento de la presente ley deberá dictarse en un plazo de ciento ochenta días, contado desde su publicación.

Artículo quinto.- El Consejo señalado en el artículo 12 deberá constituirse en el plazo de ciento ochenta días, contado desde la publicación de la presente ley. Para dicho efecto, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá hacer las respectivas propuestas al Presidente o a la Presidenta de la República con al menos treinta días de anticipación al cumplimiento de dicho

plazo, para lo cual deberá iniciar con la debida antelación los respectivos procesos.

Artículo sexto.- La primera versión de la Política establecida en el artículo 5 deberá ser propuesta para aprobación del Presidente o Presidenta de la República en el plazo de ciento ochenta días a contar de la constitución del Consejo señalado en el artículo 12.

Artículo séptimo.- El artículo 34 entrará en vigencia a contar de la fecha de entrada en operaciones del Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas el día 20 de marzo de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot, José Miguel Insulza Salinas, Ricardo Lagos Weber (Presidente), Daniel Núñez Arancibia y Gustavo Sanhueza Dueñas; y el día 30 de julio de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, José Miguel Insulza Salinas, Felipe Kast Sommerhoff y Ricardo Lagos Weber (Presidente)

Sala de la Comisión, a 30 de julio de 2024.



MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE CREA EL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DE GOBIERNO. (BOLETÍN Nº 16.316-05).

I. OBJETIVO (S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Crear el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, que tendrá por objeto contribuir a agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado.

- Definir una nueva regulación para la auditoría interna gubernamental, fortalecer su carácter técnico e independiente, así como su institucionalidad y contar con una Política de Auditoría General de Gobierno.

- Crear un Consejo Consultivo de Auditoría Interna, órgano colegiado que asesorará al Auditor General de Gobierno en materias de auditoría interna, gobernanza, control interno y gestión de riesgos.

- Otorgar reconocimiento legal a la Red de Auditoría Interna, conformada por auditores institucionales y los equipos de profesionales de auditoría interna y robustecer las unidades de auditoría interna de la Administración del Estado.

II. ACUERDOS: aprobado en general por mayoría (4x1 abstención).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 34 artículos permanentes y de siete disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Los artículos 18 y 28 del proyecto de ley tienen el carácter de ley orgánica constitucional por establecer el deber de estricto cumplimiento al principio de probidad, en mérito de lo dispuesto en el artículo 8° inciso primero, en relación al artículo 66 inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

Los artículos 19 y 32 del proyecto de ley tienen el carácter de ley de quórum calificado por establecer la reserva de información en mérito de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, en relación al artículo 66 inciso segundo, ambos de la Constitución Política de la República.

V. URGENCIA: “suma”.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: en sesión de 22 de enero de 2024, en general por mayoría de 131 votos, 1 voto en contra y 4 abstenciones.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de enero de 2024.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Ley N° 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica.

3.- Ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

4.- Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

5.- Código Civil.

6.- Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

7.- Decreto ley N° 1263, de 1975, del Ministerio de Hacienda, de Administración Financiera del Estado.

8.- Ley N° 19.553, que concede asignación de modernización y otros beneficios que indica.

9.- Ley N° 18.834, aprueba Estatuto Administrativo.

10.- Decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

11.- Decreto ley N° 249 de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala.

Valparaíso, a 30 de julio de 2024.


MARÍA SOLEDAD ARAVENA
Secretaria de la Comisión